

La lavandería del Hospital San Pedro (La Rioja)

El negocio de los trapos sucios

Cristina López

Toca reducir el gasto público. Así que los trabajadores más indefensos de las administraciones se echan a temblar y las empresas privadas se frotan las manos. Lo están comprobando los trabajadores, la mayoría mujeres, de la lavandería del Hospital San Pedro de La Rioja, amenazada por la privatización.

En la lavandería del San Pedro hay 60 trabajadoras, de ellas 17 con contrato fijo, la mayor parte con más de 45 años y una década de trabajo en ese servicio, de media. Hay quien lleva 20 años de interinidad con un contrato por acumulación de tareas y otras 15 personas, con contratos de un mes, desde hace tres años.

En dos décadas no ha habido oposiciones para estabilizar la plantilla. Tampoco inversiones que mantengan en buen estado las máquinas y las instalaciones o garanticen la seguridad y salud de las trabajadoras. A pesar de ello, las trabajadoras ha tenido un comportamiento ejemplar, acudiendo a sus puestos, incluso en domingo, realizando dos turnos, con tal de tener lista la ropa que necesitan los pacientes

Como agradecimiento, el gobierno riojano pretende «externalizar» (un malabarismo lingüístico para encubrir la privatización) el servicio. Según parece, los motivos alegados pasan por la imposibilidad de afrontar las necesarias inversiones de adecentamiento y mantenimiento de la lavandería o, lo que es lo mismo, la intención de recortar gastos. El presidente riojano, Pedro Sanz, lo justificaba por la búsqueda de la «la eficiencia y la contención de gastos que marca el Gobierno socialista en sus directrices».



A las dos semanas de conocerse los planes del ejecutivo regional, la dirección del hospital se reunió con el personal que tiene la plaza en propiedad de la lavandería para garantizarle un puesto de trabajo, sin especificar dónde ni en qué condiciones. Días más tarde, llegó el turno de dar explicaciones al personal eventual, al que la gerencia expuso el proyecto de sacar el servicio a concurso público y dar libertad a la empresa que resulte adjudicataria para contratar al personal.

La plantilla reaccionó convocando movilizaciones en contra de la privatización. Las centrales sindicales presentes en las mesas sectoriales del Servicio Riojano de Salud (SERIS)

–UFT, CC.OO., CSI-CSIF, STAR, GEMSATSE y USAE– al unísono han respaldado las acciones de las trabajadoras desde un principio, manteniendo hasta el momento la unidad de acción. Desde que se hizo público el plan del Ejecutivo Regional ha habido concentraciones, durante la hora del café, a las puertas del hospital.

«Hay nervios, preocupación, comentarios...», explica Marisa Visa, una de las trabajadoras eventuales de la lavandería, sobre el ambiente entre la plantilla. «No nos han dado la opción de sacar la plaza fija y ahora, ¿qué empresa se va a hacer cargo de nosotras, con nuestra edad?», se pregunta la trabajadora, precisamente en un momento dramático para el empleo.

Pedro Sanz declaró –a preguntas de la oposición, durante un pleno celebrado el pasado 12 de febrero, al que asistió una representación de las trabajadoras mientras unas 300 personas, concentradas a las puertas del Parlamento regional se manifestaban en contra de las privatizaciones– que a las personas del servicio de lavandería «se les va a garantizar un puesto de trabajo».

Sin embargo, la dirección del hospital no ha variado su posición inicial. José Antonio Prado, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de las Administraciones Riojanas (STRA), no sólo confirma la ausencia de compromisos firmes, sino que además considera que trasvasar al personal de lavandería a otros departamentos del hospital, obligando a despedir o desplazar a los que ahora ocupan esos puestos, es cuando menos, «dudoso».

La secretaria estatal del sector Socio-sanitario de FSP-UGT, Pilar Navarro va más lejos y comenta que «es imposible que el personal estatutario fijo del SERIS esté bajo ningún concepto bajo la tutela funcional de la empresa adjudicataria, ya que en ningún caso el SERIS puede actuar como una ETT, ya que se trataría entonces de prestamismo laboral o una cesión ilegal de trabajadores».

En la manifestación ante los representantes autonómicos, se pudieron

En la manifestación ante los representantes autonómicos, se pudo escuchar: «Sobran jefes, falta personal» o «Público el dinero, pública la gestión».

escuchar consignas muy claras: «Sobran jefes, falta personal» o «Público el dinero, pública la gestión». Francisco Martínez Aldama, portavoz del PSOE en el parlamento riojano denunció que se «va a dar a una empresa 1.500 millones de las antiguas pesetas, alguna amiga será, en un negocio redondo para esa adjudicataria».

Según el anuncio de licitación de este servicio, el Gobierno regional pagará a la empresa adjudicataria 9,1 millones de euros, por un periodo de cuatro años. El sindicalista de STRA, Prado, pone en cuestión que la privatización vaya a mejorar el servicio y ahorrar dinero al contribuyente. «Por otras privatizaciones, sabemos que puede salir incluso más caro. Por una residencia de menores, el gobierno regional paga un millón de euros más que antes. El negocio para la empresa es redondo, puesto que la administración sí que paga a los trabajadores».

Prado se pregunta «por cuánto saldrá la privatización de la lavandería,

si pretenden procesar 1,5 millones de ropa, medio millón más que antes, y hay que renovar las máquinas. O se resiente el servicio, o las condiciones de trabajo o las dos cosas a la vez, sin que nadie nos garanticen que no vamos a pagar más que antes».

Silvia Tobía, secretaria de Salud de FSP-UGT, ha realizado una fotografía del SERIS. «Se ha subcontratado la limpieza y la seguridad de los centros y el transporte sanitario. Se han externalizado o privatizado parte de rayos, el banco de sangre, el mantenimiento, la unidad de mama, radioterapia, docencia, investigación, formación continua y en este momento la lavandería del Hospital San Pedro».

Según Silvia Tobía, el modus operandi es siempre el mismo: se desprestigia el sistema público, se favorece la privatización, se externalizan servicios, se crean hospitales públicos con gestión privada y a largo plazo existe un auge de las clínicas privadas y entidades aseguradoras y se degrada la asistencia pública que queda en medidas básicas para grupos sociales excluidos.

Las reivindicaciones de las trabajadoras de la lavandería son claras: mantener sus actuales puestos de trabajo tanto de quienes tienen su plaza en propiedad como de quienes no han podido consolidar en todo este tiempo sus empleos. En caso de que no haya más remedio que privatizar y que de verdad sea más rentable, piden la subrogación en la nueva empresa adjudicataria respetando los derechos adquiridos. ■

